

El gobierno promulgó la ley de educación; el parlamento aprobó el presupuesto; los educadores levantaron la huelga. Pero nada anuncia un próximo año lectivo mejor. El anterior fue un desastre y el que pronto comenzará, lo amenaza un clima de guerra. ¡Es que vamos a continuar comprometiendo el futuro de nuestros muchachos, tal vez lo único limpio que queda en el infecto ambiente en que vivimos?

La "crisis de la enseñanza" viene de atrás. Y de sus inicios tal vez todos tengamos culpa. Gobernantes y partidos cuya voracidad política corrompió el sistema; profesores y maestros que no estuvieron a la altura de sus responsabilidades y no previeron lo que iba a venir; padres despreocupados o cómplices de la degradación creciente del país, que no atinaron a fortalecer sus naturales conexiones con hijos y maestros. Pero si en los inicios la culpabilidad correspondió a todos, en su etapa crítica, quedó bien clara la responsabilidad de cada quien. Los asaltantes del liceo 8 y asesinos de Rodríguez Muela, sueltos e impunes, protegidos además por quienes debieron castigarlos, marcan a fuego. Y no es con palabras que se lavará la sangre de los muchachos asesinados.

—En medio del tenso clima existente, el flamante gobierno del señor Bordaberry, definió su política educativa con un ataque a fondo. El arma esgrimida fue el presupuesto. Aunque indirecta, intentó herir con saña.

El Consejo de Primaria —consejo político con mayoría oficialista— había preparado un proyecto de presupuesto con un monto que se elevaba a los 71 mil millones de pesos. El de Secundaria presentó el suyo, por 30 mil millones. El de UTU por 28 mil millones. Y la universidad por 44 mil millones. En total 173 mil millones de pesos, destinados a cubrir el costo del sistema educativo del país.

El gobierno recibió los proyectos parciales y días después, a mediados de setiembre, cumpliendo la obligación constitucional, remitió al parlamento el proyecto definitivo. En él fijó para Primaria 22 mil millones; para Secundaria, 10 mil; para la UTU, 6 mil; y para la universidad 8 mil millones. En total los bajó casi a la cuarta parte.

La tacañería aplicada a la enseñanza, hacía contraste con la dispendiosa generosidad otorgada a las fuerzas del orden. "Mientras el presupuesto se multiplica por 5,8 y las partidas de Defensa se multiplican por más de 12, las de la enseñanza no alcanzan a multiplicarse por 4." Hecha esta comparación agregaba nuestro compañero Quijano: "Estas pocas cifras muestran gráficamente la magnitud de los cambios cualitativos que se han producido en el país".

Un soldado raso ganaría, de acuerdo con el proyecto presentado por el Ejecutivo, sesenta mil pesos con casa y comida. Un maestro "raso", cincuenta y tres mil pesos, sin casa y sin comida.

El golpe provocó la inusitada reacción. Los docentes, en todos los niveles, se movilizaron. Los apoyaron los obreros organizados y una gran masa de pueblo. A los paros totales decretados por la CNT respondió positivamente todo el país.

HORIZONTE CERRADO

El Consejo de Primaria, pese a ser de extracción política y de tener mayoría oficialista, expresó su protesta. Lo mismo el de Secundaria y el Central Universitario. Las organizaciones de docentes iniciaron sus movilizaciones.

Pero el gobierno no se detuvo ahí. El 5 de octubre dio su segundo golpe. Presentó al parlamento el proyecto de ley general de educación "con declaración de urgente consideración". La mayoría parlamentaria del pacto chico lo convertiría en ley el 5 de enero. Todo decidido desde el primer día.

La lucha iniciada en torno al presupuesto, tomó la bandera de la resistencia a la ley. El 30 de octubre iniciaron los maestros, funcionarios y personal de servicio de Primaria, la huelga por tiempo indeterminado; entre el 6 y el 9 de noviembre se plegaron los sectores de Secundaria y de enseñanza privada. Tuvieron el apoyo de la universidad, de los demás gremios, y en especial de la CNT.

Tanto las escuelas como los liceos permanecieron inactivos los dos últimos meses del año. Para Primaria la huelga sólo alcanzó a Montevideo y Canelones. El propio gremio decidió no extenderla al resto de los departamentos.

La movilización alcanzó niveles muy altos de participación popular. Se organizaron reuniones de padres que utilizaron clubes deportivos, sedes sindicales, casas parroquiales, locales de organizaciones de diversa índole. Y hubo asambleas en todos los barrios de Montevideo, en todos los pueblos y localidades de Canelones, y en todas las capitales de los departamentos. Se reunió a los obreros de las fábricas, a los empleados de los bancos, y se aprovechó toda posibilidad para informar a las gentes sobre los motivos de la huelga y los contenidos de la ley.

Como movilización popular, la realizada en los dos últimos meses alcanzó niveles pocas veces logrados. Los maestros y los profesores rehicieron durante esta campaña una verdadera docencia a nivel de pueblo.

Pero el gobierno, pacto mediante, mantuvo

su decisión. Pocos minutos antes de agotarse el plazo impuesto por la "urgencia", se dio el lujo de lograr una precaria mayoría.

En la discusión del presupuesto, las cosas resultaron distintas. Las más flagrantes injusticias fueron enmendadas y en el parlamento la mayoría incondicional del pacto chico no se comprometió con un respaldo total al proyecto del Ejecutivo. Esto tampoco se atrevió, en los últimos días, a vetar las enmiendas aprobadas por el Legislativo en el sector de la educación.

Aprobada la ley y el presupuesto y levantada la huelga, esta paz estival no es más que aparente. El gobierno no cede en su actitud ni en sus propósitos. Su intención predominante —que se expresa en la ley como "despolitización"— es precisamente, imponer la política de los que mandan en los centros de enseñanza. Para facilitar esa penetración ha comenzado por designar un Consejo Nacional de Educación, que por los antecedentes de sus miembros, servirá cumplidamente a los principios y propósitos que lo inspiran. Ninguno de ellos —pese a sus retribuciones ministeriales— es docente de significación. De ninguno de ellos conocemos libros o trabajos o actuaciones que les den perfil de educadores. A ninguno de ellos vimos nunca en un puesto de sacrificio o de lucha que pueda servir de ejemplo a la juventud.

Las consecuencias que traerá la aplicación de la ley pudieron atenuarse con el nombramiento de un Gran Consejo Nacional. Pero el presidente y su consejo de ministros han preferido tomar otros caminos. Ellos sabrán por qué. Pero que no se quejen después de la respuesta que recibían.

Los maestros se han reunido en su convención para hacer el examen crítico de su resistencia a la ley. Lo propio, a su vez, harán los profesores. Es un hito en la lucha que, de acuerdo con los signos que se evidencian, recomenzará al iniciarse las clases.

Docentes de Primaria y de Secundaria, que tienen por qué saberlo, nos aseguran que éstas comenzarán normalmente y que no serán ellos quienes tiren la primera piedra. Volverán a sus tareas a recomponer fuerzas y a reafirmar el respeto y la consideración que se han ganado en el pueblo, mediante una mayor dedicación y una más sólida capacitación docente. Además deben consolidar su unidad, un tanto resentida por las vicisitudes de la larga huelga.

Pero si alguien debe asimilar la dura enseñanza del frustrado año lectivo, son los padres. Deben comprender una vez por todas que su participación permanente y directa, con los educadores de sus hijos es importante y requiere su atención. Una de las comprobaciones que recogimos los que participamos en la movilización popular es la ignorancia de los padres sobre los problemas e intereses que giran en torno a sus hijos. Esa ignorancia no es perdonable y debe ser transformada en una actitud comprensiva y comprometida de lo que es el hecho educativo. Tanto en lo que refiera al proceso de formación de los muchachos, como a los peligros que los acechan.